



Olaga Amparo Sánchez Gómez  
Corporación Casa de la Mujer

# Situación de los derechos sexuales y reproductivos

Colombia  
1995 - 2000

Desde hace varios años, el movimiento feminista en todo el mundo ha encaminado una lucha incansable en favor del reconocimiento, la defensa y el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos, el *Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer* –CLADEM– ha hecho un llamado para que en toda América Latina y el Caribe, se sigan construyendo espacios de reflexión, de debate y de acción sobre los derechos humanos de las mujeres, proponiendo así una campaña para la realización de una Convención Interamericana sobre los derechos sexuales y reproductivos.

En efecto, para avanzar en la comprensión de la situación de los derechos sexuales y reproductivos en la región, era necesario reconocer el panorama en que se debate cada país; las particularidades propias y las complejidades de las que derivan las tensiones y vacíos existentes, obteniendo elementos de juicio que permitieran efectuar una primera comparación entre los países miembros del CLADEM.

Es por esto que se inició la tarea de realizar 16 diagnósticos regionales con el propósito de presentar información fundamental de la situación y el estado de los derechos sexuales y reproductivos en Colombia, como parte de la campaña que se está adelantando por una Convención Interamericana de derechos sexuales y reproductivos en la región.

“El Diagnóstico sobre la situación de los derechos sexuales y reproductivos en Colombia”, elaborado por la Corporación Casa de la Mujer, contiene información esencial de las realidades que afectan a la población, realizando un balance de los procesos políticos, sociales y económicos, así como de la legislación y las políticas públicas implementadas por el Estado con respecto a los derechos sexuales y reproductivos. De igual forma, este diagnóstico intentó incorporar las posiciones de



los distintos actores y actoras en torno a los temas seleccionados de los derechos sexuales y reproductivos, relevantes en la escena del debate público y legislativo. Por último, contiene las conclusiones con respecto a los avances y retrocesos, retos y posibilidades de los derechos sexuales y reproductivos en Colombia.

Para la elaboración del diagnóstico de Colombia, se utilizaron las guías metodológicas propuestas por CLADEM, las cuales se referían a: radiografía del país en donde se incluyó la información cuantitativa relevante de la población colombiana frente al tema de los derechos sexuales y reproductivos. Es necesario aclarar en este punto, que en los casos en que no se contaba con información disponible para el período establecido, se tomaron los datos de los años más cercanos. Guías de revisión de encuestas de opinión, periódicos y revistas: para la elaboración de esta revisión se tuvieron en cuenta los diarios más representativos de cada orientación como *El Tiempo*, de orientación liberal y *Nuevo Siglo* de tendencia conservadora. Allí se hizo una elección de tres temas principales, basados en la existencia de un mayor número de artículos, aspecto que facilitó el análisis del debate público, suscitado por estos temas en el país. Los tres temas fueron la prostitución, la violencia intrafamiliar (delitos sexuales) y el aborto. Registro y revisión de la legislación nacional y las políticas públicas relacionadas con los temas seleccionados de los derechos sexuales y reproductivos; para la información referente a políticas, programas y proyectos se consultaron a las instituciones responsables de su formulación, ejecución o evaluación; sin embargo, se enfrentaron múltiples obstáculos, pues se negaba la información o ésta se encontraba incompleta. Esta situación obligó, en algunos casos, a utilizar el derecho de petición<sup>1</sup> para solicitar dicha información.

Revisión Bibliográfica: para la revisión de este instrumento se consignaron algunas investigaciones elaboradas por instituciones académicas y organizaciones gubernamentales que dieron cuenta del debate académico suscitado por los temas de derechos sexuales y reproductivos en Colombia. Guía de entrevistas a representantes: el desarrollo de este instrumento permitió establecer las principales percepciones sobre la evolución que han tenido los diferentes temas de derechos sexuales y reproductivos planteados, desde el punto de vista de representantes de ONG's especializadas, académicos, iglesias y funcionarios.

---

1 El Derecho de Petición se encuentra contemplado dentro del Código Contencioso Administrativo y se refiere al recurso que tiene todo ciudadano y toda ciudadana para solicitar, de la administración pública o de sus servidores, información y hacer consultas y reclamaciones.



El diagnóstico elaborado permitió constatar que el desarrollo que ha tenido el tema de los derechos sexuales y reproductivos, ha sido el resultado de una constante lucha entre las relaciones que mantiene el Estado y la sociedad civil, tan complejas y contradictorias, que obligan a tratar de entender esta situación, desde la concurrencia de procesos políticos, económicos, sociales y culturales, incidiendo directamente en el estado y la situación de dichos derechos.

Asimismo, los avances y retrocesos en la protección y promoción de los derechos sexuales y reproductivos en Colombia, están asociados a las dinámicas internacionales, a los desarrollos constitucionales y legislativos, al contenido de los programas, de políticas referidas a la salud reproductiva y a la sexualidad, y a las luchas del movimiento feminista y de mujeres, desde los discursos libertarios y las prácticas políticas y sociales de resistencia del movimiento.<sup>2</sup> En este proceso, se presentan claros antagonismos entre las formulaciones teóricas, las posiciones del Estado y la iglesia, los actores y las actoras sociales y políticos que se movilizan, bien para defenderlos o para atacarlos, y los intereses y necesidades de las mujeres.

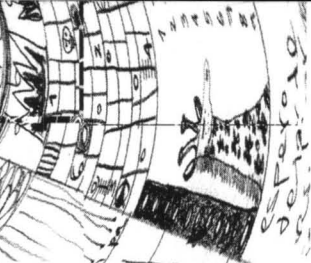
En Colombia, la situación de los derechos sexuales y reproductivos es todavía precaria, pues si aún estamos lejos de superar las problemáticas nacionales, resulta difícil contemplar la situación de estos derechos en una mejor perspectiva. Las luchas emancipatorias de las mujeres colombianas han permitido obtener avances significativos en materia de legislación y políticas públicas en los últimos cinco años; sin embargo, estos esfuerzos se siguen viendo menoscabados por la subvaloración que tiene el Estado frente a estos contenidos, en tanto que este último sigue reproduciendo una cultura patriarcal, la cual refuerza las relaciones asimétricas y de dependencia entre varones y mujeres.

Otro elemento que sin duda caracteriza el desarrollo de los derechos sexuales y reproductivos en el país, es el papel que han tenido las actoras y los actores del movimiento feminista y de mujeres, que sin duda han logrado permear la esfera pública, poniendo de relieve las necesidades de las mujeres y movilizándolo a algunos sectores de la sociedad, con el fin de aportar avances significativos para las mujeres.

En la pasada década, varios hechos marcan el desarrollo de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en Colombia. Por ejemplo, las convenciones internacionales han constituido una ganancia para ellas por cuanto son consensos inter-

---

2 TAMAYO León, Guilia. *Derechos y ética en la salud reproductiva*. En: Diálogos de Mar y Viento, CLADEM, Lima, 1995.



nacionales que “exigen” que el Estado cumpla con los compromisos adquiridos allí, favoreciendo el desarrollo legislativo en algunos de los temas de derechos sexuales y reproductivos. De igual modo, ha puesto mayor énfasis a temas relacionados con la violencia intrafamiliar, el abuso sexual a menores y el VIH-Sida, como verdaderos problemas de salud pública que ponen en duda el futuro mismo de la nación.

Igualmente, el reconocimiento de los derechos de las mujeres en Colombia ha tenido un progresivo desarrollo legislativo desde la promulgación de la Carta Constitucional de 1991, aprobando en la última década un conjunto de disposiciones legales que favorecen a las mujeres en la obtención de condiciones de equidad, reconocimiento social y participación ciudadana. La Constitución Nacional de 1991 consideró el tema de los derechos humanos en general, haciendo especial énfasis en el principio de igualdad entre hombres y mujeres, la no discriminación por sexo, el diseño de mecanismos para hacer efectivos esos derechos y la creación de una Corte Constitucional especializada en los temas constitucionales.

A partir de ese momento, la Jurisprudencia y especialmente la Corte Constitucional, empiezan a desarrollar conceptos y fallos acerca de temas como el derecho a la salud, el derecho a la salud reproductiva, la atención a enfermos y enfermas de sida, la violencia intrafamiliar, el consentimiento sexual en el matrimonio, la intensidad de las penas asignadas a los delitos sexuales, el fuero militar para delitos sexuales (los militares que incurrieren en delitos sexuales durante el ejercicio de funciones serán sancionados conforme a la legislación penal militar) por la autonomía sexual, el despido injusto de la mujer embarazada y el incumplimiento de las obligaciones laborales del empleador o la empleadora, la educación sexual, el cese de los efectos jurídicos del matrimonio tanto civil como religioso y la reglamentación de las uniones de hecho, entre otros.

Colombia presenta una amplia formulación de leyes, planes, programas y proyectos referidos a la salud sexual y reproductiva durante el período 1995-2000. Sin embargo, la conclusión a la que se puede llegar, después de realizar un análisis de las fuentes existentes sobre el tema en las diversas instituciones del Estado, es la inexistencia de políticas sustentables, sostenibles, con metas definidas a mediano y largo plazo, que posean recursos económicos, técnicos y materiales, y que sean efectivas, viables y realistas, que permitan la ampliación, el reconocimiento y la protección de los derechos sexuales y reproductivos y especialmente el de las mujeres y las niñas. Las estadísticas y las investigaciones siguen demostrando lo poco que se ha avanzado en la materia, generando, a veces, la imagen de un verdadero retroceso en el tema, afectando, como una constante, a la población más pobre y vulnerable. Los indicadores



nos revelan cómo la violación a los derechos sexuales y reproductivos ocurre con mayor frecuencia contra las mujeres y las niñas, manifestada en maltrato físico, abuso y violencia sexual, violencia sociopolítica, intimidación, explotación en el trabajo o la institución educativa, violación, tráfico de personas, prostitución forzada y violencia indiscriminada, y difícil acceso a servicios y adecuada calidad de los mismos. Muchas de estas realidades son causa de la inoperancia e invisibilidad del Estado y sus instituciones, y de las normas y valores tradicionales muy arraigados en los símbolos y prácticas cotidianas de varones y mujeres en la sociedad.

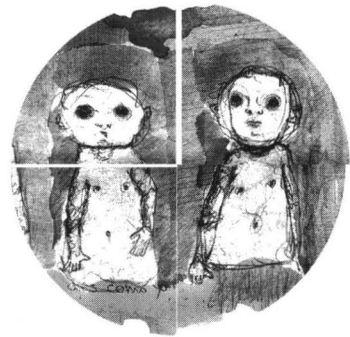
En los últimos cinco años, vemos también cómo el tema de las mujeres ha sufrido una involución, asociándose este hecho a la pérdida de instituciones de gran trascendencia como fue la Dirección Nacional de Equidad para las Mujeres, el recorte de recursos y el desmonte de programas como política del plan de desarrollo del gobierno Pastrana (1998-2002). A nivel institucional también se percibe una clara dispersión de funciones, aspecto que redundaría en el desaprovechamiento de los pocos recursos que son asignados para hacer efectivos los derechos sexuales y reproductivos. Por otro lado, en muy pocos casos, la atención a las personas a quienes les han sido vulnerados estos derechos, es realizada por instituciones con equipos especializados, que redunden en aptitudes de confianza para denunciar y, de esta manera, disminuir los niveles de impunidad.

Es importante también resaltar cómo la protección a la mujer gestante, en cualquiera de sus manifestaciones, continúa siendo relacionada con la concepción de la maternidad como una función adscrita a las mujeres, con el sólo propósito de “reproducir y perpetuar la especie”. Es abundante la jurisprudencia sobre la protección a la maternidad cuando ésta ha iniciado su tránsito hasta su desenlace con el parto; en este sentido, se asume la defensa de la maternidad desde una perspectiva tradicional y patriarcal. No obstante, es casi inexistente cuando se trata de proteger la autonomía reproductiva, en los casos en que ella se manifiesta por la decisión de no ser madre o cuando requiere tratamiento para, en caso de haberlo decidido, propiciarle las condiciones médicas, sociales y culturales, que requiera como acción positiva para configurar el derecho.

Muestra de ello son las tres sentencias hito<sup>3</sup> que niegan el reconocimiento y ejercicio de la autonomía procreativa. Se hace relación a las que han declarado constitucionalidad de las normas que penalizan

---

3 Sentencia C-133/94; C-013/97 y T-1104/00.



la interrupción voluntaria del embarazo, así como aquella que niega el procedimiento quirúrgico de fertilidad, ratificando una omisión del Estado y de las EPS, que desconoce abiertamente esa autonomía procreativa que, en algunos casos, necesita de esa acción positiva del Estado para materializar efectivamente el derecho a la vida digna, a la igualdad, a la libertad, al libre desarrollo de la personalidad, enmarcados todos, en la autonomía procreativa.

En el caso en que las mujeres han recurrido a la tutela, para amparar su derecho a la reproducción, se sanciona a la mujer impedida para concebir, negándole el procedimiento quirúrgico requerido, sobre la argumentación de tratarse de un derecho de carácter “prestacional” que “para nada encuentra relación con la vida” y, por ende, que dicho trato no vulnera los derechos al libre desarrollo de la personalidad, a la igualdad, reitero, a la autonomía procreativa.

Algunas sentencias de la Corte<sup>4</sup> relacionadas con los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, se originaron en la negación de la prestación del servicio de salud (atención prenatal, posparto) por parte de la Empresas Prestadoras de Salud, por mora patronal en el pago de los aportes.

Resulta entonces significativo que en los últimos años no haya sido posible lograr que se apruebe una ley que reconozca la libre opción a la maternidad o que se sancione el acoso sexual. La libertad reproductiva de las mujeres sigue siendo regulada por las normas religiosas sobre su cuerpo, sus deseos y sus necesidades. Sus cuerpos, sus decisiones reproductivas, su sexualidad, no pueden continuar atrapados en la lógica de la cultura patriarcal.

Es igualmente evidente la ausencia de políticas claras a favor de las mujeres, de la justicia y de la equidad, que desarrollen de manera específica las iniciativas que en salud sexual y reproductiva requieren, y que garantice y exija que el Estado Colombiano cumpla con los compromisos adoptados en los Tratados Internacionales y en las Conferencias de Población y Desarrollo y de la Mujer. A pesar de contar con garantías constitucionales y políticas en torno a los

4 Otras catorce sentencias se originaron en el periodo 1998-2000 relacionadas con los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Véanse las Sentencias T-195/99; T-477/00; T-347/00; T-554/00; T-1083/00; T-105/98; T-1203/00; T-554/00; T-322/00; T-976/00; T-743/00; T-1053/00; T-248/98.





derechos sexuales y reproductivos en el país, existen grandes vacíos e inconsistencias legales, pero sobre todo, carencias en la implementación, cuyo abordaje deriva de enriquecer la calidad de vida de la población que en esta materia nos convoca.

Sin embargo, por suerte, los pasos que hemos dado no son los definitivos, sino que hacen parte del largo recorrido que nos hace falta por trasegar. Es imprescindible, entonces, que el Estado asuma una verdadera voluntad política, definiendo e implementando claramente una política de derechos sexuales y reproductivos, que ampare y garantice el disfrute pleno de una vida sexual y reproductiva sin condicionamientos. Para la efectividad de estos retos que plantea el tema, el movimiento de mujeres y las feministas, quienes poseen mayores compromisos con esta lucha, deben superar las dificultades que enfrentan para continuar dinamizando políticas y prácticas que garanticen el derecho que tienen hombres y mujeres sobre sí mismos, sobre sus cuerpos y sobre todas las decisiones que tienen que ver con la interacción de sus cuerpos con otros cuerpos, como expresión del proceso de construcción democrática al que están llamadas y llamados.

El campo de los derechos sexuales y reproductivos, constituye un espacio que debe favorecer la humanización de individuos y de colectivos sociales, con impacto en la vida social, política y económica de hombres y mujeres. Indudablemente, esta es una acción impostergradable que requiere grandes compromisos de los distintos sectores de la sociedad, en el que es necesario seguir haciendo aportes importantes, promoviendo el debate conjunto entre hombres y mujeres sobre cómo lograr una sociedad más igualitaria y más justa, en donde mujeres y hombres puedan gozar de un bienestar físico, mental y social, y puedan disfrutar de una vida sexual y reproductiva en libertad y autonomía. ♦

